



El nuevo titular de la ASF debe ejercer su cargo con independencia. Robustecer la supervisión del gasto fortalece al gobierno.



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

Auditar al poder

La vigilancia del gasto público es una de las funciones más importantes de cualquier Congreso o Parlamento. Quien aprueba el presupuesto tiene la obligación de revisar cómo se ejerce. Sin supervisión efectiva, el dinero público se convierte en terreno fértil para la corrupción, el despilfarro y los proyectos mal diseñados. La rendición de cuentas del gasto no es un asunto técnico menor: es un pilar de la democracia.

En México esa tarea corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico del Congreso encargado de revisar la cuenta pública. Su titular, el auditor superior, ocupa uno de los cargos más relevantes de la vida pública mexicana: es responsable de vigilar cómo se utilizan cientos de miles de millones de pesos cada año. Sin embargo, paradójicamente, el cargo y la institución suelen tener poca visibilidad pública pese a la enorme importancia de su función.

La ASF nació en 1999 mediante una

reforma constitucional impulsada por el presidente Ernesto Zedillo. Sustituyó a la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, el órgano que desde 1824 revisaba las cuentas del gobierno. Durante gran parte del siglo XX esa institución fue débil porque el Congreso, subordinado al presidencialismo dominante, abdicó de su responsabilidad de exigir cuentas al Ejecutivo. El resultado fue un sistema con escaso control del gasto y altos niveles de corrupción.

La creación de la ASF coincidió con un cambio político clave: en 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Con gobiernos divididos, el Congreso adquirió mayor independencia y la Auditoría pudo consolidarse como una institución profesional.

Entre 2000 y 2018 la ASF desempeñó un papel central en la detección de irregularidades en dependencias federales, estados y programas públicos. Uno de los casos más emblemáticos fue la Estafa Maestra, un esquema de desvío de recursos mediante univer-

sidades públicas y empresas fantasma que operó principalmente entre 2013 y 2014. Las auditorías de la ASF permitieron documentar ese mecanismo y abrir investigaciones administrativas y penales. Hasta ahora más de una decena de funcionarios han sido sancionados o vinculados a proceso.

Ese papel comenzó a debilitarse a partir de 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Morena obtuvo amplias mayorías legislativas y el sistema de contrapesos se erosionó.

El punto de quiebre ocurrió en 2021, cuando la ASF estimó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado 331 mil millones de pesos, una cifra muy superior a la que sostenía el gobierno, cercana a 100 mil millones. El Presidente reaccionó con enojo y descalificó públicamente el cálculo. Poco después, la Auditoría corrigió sus cifras.

Más allá de la discusión técnica, el episodio dejó una señal preocupante: el

órgano encargado de auditar al gobierno parecía retroceder cuando sus hallazgos incomodaban al poder. Desde entonces el auditor David Colmenares adoptó una actitud de complacencia frente al Ejecutivo que mermó la credibilidad y la efectividad de la institución.

López Obrador llegó al poder prometiendo combatir la corrupción, pero su gobierno rechazó sistemáticamente cualquier señalamiento institucional sobre posibles irregularidades en el uso del gasto público.

Ayer fue elegido un nuevo auditor superior que encabezará la ASF durante los próximos ocho años. Su cargo es uno de los más importantes del sistema de rendición de cuentas del país y debería tener mucha mayor visibilidad pública.

El problema de fondo es político. El verdadero eslabón perdido de la democracia mexicana sigue siendo el Congreso. Cuando el Poder Legislativo abdica de su responsabilidad de vigilar al Ejecutivo, la corrupción, los proyectos improductivos y el bajo crecimiento económico dejan de ser accidentes: se vuelven consecuencias previsibles.

La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de propiciar que el nuevo auditor ejerza su cargo con independencia. Robustecer la supervisión del gasto no debilita al gobierno: lo fortalece. Un sistema de control creíble genera confianza, atrae inversión y ayuda a crear mejores condiciones para el crecimiento económico.